ARTICULOS

NUESTRA MEMORIA Y LOS ARCHIVOS

M.^a DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO

Directora Honoraria del Archivo
General de la Administración

Mentalización

Los archivos son memorias colectivas. Pero además memorias mucho más duraderas que nuestra propia memoria individual, que termina con nuestra ausencia del mundo de los vivos.

Son, es cierto, memorias falibles, como las nuestras, y de ellas debemos entresacar la realidad, lo que fue, no lo que se amañó o imaginó. En un archivo encontraremos verdades y falsedades, como también en nuestra propia memoria guardaremos recuerdos de los que a veces tendremos la duda de si fue un hecho real o sólo una apreciación nuestra. Ese trabajo de entresacar y contrastar corresponde al que investiga, al que trata de averiguar la verdad, o mejor dicho, esas pequeñas verdades que concurren en los hechos, ya que la verdad absoluta, la verdad entera y —valga la redundancia— verdadera yo creo que es inalcanzable. De cada lado hay siempre un poco de verdad y un poco de razón.

Cuando nosotros queremos dejar memoria de nuestra vida empezamos a remover los recuerdos. Cuando queremos hacer memoria de hechos colectivos removemos los papeles de los archivos. Por otra parte, ambos procesos no son independientes. Hay algo de nuestras vivencias personales que pueden aportar mucho al esclarecimiento de las vivencias colectivas que tratamos de conocer. Por eso, porque hay tanto archivado en nuestras

memorias individuales como plasmado en soportes materiales es por lo que ha empezado a reconocerse el interés de estas aportaciones dando lugar a los llamados archivos orales para la Historia.

Pues bien, si admiramos a una persona que tiene el privilegio de una gran memoria, tendremos que admirar por igual a una nación, región o ente geográfico que tenga su memoria colectiva bien organizada, es decir: sus archivos en orden. Somos el resultado de nuestros antecedentes y el origen de lo que vendrá después. Si sabemos aprovechar las enseñanzas tendremos facilitado el trabajo para nuestro desenvolvimiento, y si sabemos dejar memoria de esta actualidad que vivimos facilitaremos el camino a las generaciones futuras. Porque aunque la Historia no se repite enteramente, ya que las circunstancias condicionantes van cambiando, la Historia no es mera curiosidad, es también información y aprendizaje. Y aunque es admitido que nadie escarmienta en cabeza ajena siempre será mejor partir de unos antecedentes que partir de cero.

Por eso cuando una comunidad adquiere madurez vuelve los ojos a su pasado y trata de conocerlo para conocerse mejor, y cuando esa comunidad quiere organizarse procura afanosamente reunir todos sus antecedentes fijados en soportes materiales, completando sus informes con los orales, sobre todo cuando aquéllos han sido diezmados.

Tal es el caso de algunos de los países del llamado Tercer Mundo. Y puede ocurrir entonces algo que nos sirva de lección: que alguno de estos países construya su gran archivo estatal con todos los adelantos, con local para exposiciones, para conciertos, para conferencias, para biblioteca... mucho mejor que otros países más viejos con mucha más historia documentada sobre sus espaldas. Este es el caso de Kenia, que en octubre de 1978 tenía ya hecho un proyecto para un gran archivo cuyos depósitos en primera fase estarían constituidos por una nave de siete plantas, que en una segunda fase sería completada con otra de otras siete.

Estamos, pues, ante el hecho curioso de que quien anda escaso de documentación la busca afanosamente por donde sea para conservarla, mientras que quien anda sobrado no le concede la importancia debida.

Ante esta falta de atención debemos de luchar por todos los medios planteando el problema desde el punto de vista personal para luego trasladarlo al colectivo. Si de siempre hemos alabado a las personas de categoría intelectual, diciendo que estaban muy «documentadas», también hemos motejado a quienes eran ignorantes e ineficaces como personas «indocumentadas». Decir «Fulano es un indocumentado» era descalificarlo en el ejercicio de su actividad. Sin embargo, lo hemos dicho y repetido mecánicamente, sin darnos cuenta de su verdadero contenido. Pues bien, vamos a tratar de que la administración de un Estado, una institución o una empresa no caiga en la categoría de «indocumentada», que conozca cuanto tiene que conocer para mantener sus derechos y cumplir sus deberes, para no tener que inventar razones ni incurrir en los mismos errores que llevaron al fracaso. Vamos a tratar de que los archivos sean los surcos de esa memoria colectiva que almacena los datos. Nosotros fijamos en nuestra memoria nuestras vivencias que nos ayudan a sobrevivir. Pidamos a la colectividad que conozca de antemano, en lo posible, lo que puede hacer

y lo que no puede hacer. Una colectividad desmemoriada es casi, casi, una colectividad descerebrada (1).

Pongamos nuestro esfuerzo en convencer a la comunidad en que vivimos de que los archivos no son el depósito de los residuos inservibles de la administración donde unos cuantos pierdetiempos buscan curiosidades, y hacerles ver su importante cometido en el desarrollo comunitario. Y no nos estamos refiriendo sólo a los archivos estatales, sino a todos. Ninguno de ellos puede ser cercenado del conjunto sin dañar a la colectividad.

Ya sé que estoy hablando a un grupo de convencidos, pero no importa. Mi propósito es recordar a todos que es un problema de todos, no de un grupo, sugerir razones, dar armas a los colegas para defender nuestra verdad, para impulsar nuestra labor, que no es ni sólo cultural ni sólo practicista, sino las dos cosas a la vez. Para que no sintamos rubor cuando un país del Tercer Mundo en vías de organización nos da una lección de cordura en materia de archivos.

Organización

Esto no quiere decir en absoluto que aspiremos a amontonar indiscriminadamente los documentos que se van produciendo en el ámbito de nuestro territorio, ni tampoco que llevados de nuestro afán vayamos a realizar con ellos grandes desplazamientos sacándolos de su entorno natural. Previamente habrá que establecer, si no está ya creada, una red de archivos por la que se canalice el fluir de la documentación sin derramar algo de su caudal a fondo perdido, ni producir estancamientos remansados donde su efectividad va a ser nula.

Para establecer correctamente esta red tendremos que tener en cuenta dos factores: el proceso de envejecimiento de la documentación y su propia naturaleza y significado.

Este proceso de envejecimiento constituye para nosotros una de las principales preocupaciones, ya que en él se enraízan a su vez dos problemas fundamentales: las transferencias y los expurgos. Nosotros hasta ahora nos hemos ocupado más del primero que del segundo, quizás por ser de más fácil resolución, pero sobre todo porque para este último necesitamos de los organismos productores una colaboración responsable que, por pereza mental, parecen poco decididos a prestarnos.

Los dos factores ya citados de envejecimiento y naturaleza de los documentos van a motivar el fluir de la documentación y consecuente trasvase de unos depósitos a otros. Si no contásemos con la necesidad de transferir la documentación que está pasando la primera etapa de su vida en archivos inmediatos a depósitos estables, los archivos inmediatos que la recogen día a día, engordarían, se harían torpes e inoperantes por el peso muerto de los documentos que han perdido en parte o totalmente su vita-

(1) HAROLD D. LASSWELL en su «Estructura y función de la comunicación en la sociedad», publicado por primera vez hace veinticinco años, llega a comparar la necesidad y estructura de un servicio de información con la que existe y opera biológicamente en los seres humanos y animales de grado superior. (The Structure and Function of Communication in Society». B. Berelson and M. Janowitz (eds.), *Reader in Public Opinion and Communication*. The Free Press, Clencoe, 1955).

lidad administrativa. Es de todo punto necesario establecer una salida paralela bien a depósitos intermedios, bien a depósitos definitivos. Pero si en este fluir no tenemos la medida de lo que puede ser una concentración saludable y lo que llegaría a ser una concentración monstruosa, también los depósitos definitivos corren el riesgo de acabar aquejados de la misma enfermedad.

Saludable en cuanto a que si van a ser depósitos sin salida de documentación, no podemos a la vez considerarlos indefinidamente abiertos, a través de años y años, a la recepción de los documentos que se vayan produciendo. Ahí tenemos los casos de Francia, Italia y Bélgica, entre otros, que han tenido que construir verdaderas ciudades satélites de depósitos de archivo más o menos cerca de los Archivos Centrales de la nación. En EE. UU. lo están resolviendo a base de microfilm, con menoscabo de los originales. Un indefinido acumulamiento llegará a convertirlos en verdaderos monstruos inmanejables. No podemos confundir organización controlada y articulada con centralización inoperante. Hay que dejar bien definido lo que es un archivo inmediato, lo que es un archivo de tránsito y lo que es un archivo definitivo, sabiendo cortar cuando sea preciso de forma que cuando el definitivo no tenga ya más capacidad racional de admisión concentre sus esfuerzos en lo que ya tiene, dedicándose a profundizar en ello para que sus documentos den el mayor rendimiento posible, en vez de crear problemas de ensanchamiento cuando su dotación humana y económica, cuando su espacio físico y natural no sean siquiera suficientes para lo que ya tenga acumulado.

Trasladado el problema a nuestro país, ¿no se habría convertido hoy en un monstruo el Archivo de Simancas si en el siglo XVIII no hubiera sufrido una enorme sangría para formar el Archivo de Indias, y a su vez no hubiera ido languideciendo la entrada de documentos recibiendo toda la producción posterior hasta nuestros días?, ¿no ha pensado nadie que si el antiguo Archivo General Central de Alcalá de Henares —a tope en 1916, a pesar de las sucesivas ampliaciones realizadas— no se hubiera quemado, la creación del nuevo hubiera sido igualmente indispensable? El sentido común nos dice que los archivos definitivos no pueden ser un pozo sin fondo, que tiene que irse cerrando cuando han abarcado un largo período cronológico, dando paso a la creación de nuevos archivos definitivos, que a su vez serán superados por rebosamiento y plantearán la necesidad de la creación de otros que vengan a recoger las nuevas emisiones documentales.

Esta verdad fue intuita plenamente cuando a mediados del siglo XIX, en 1858, fue creado el Archivo General Central, a que acabamos de aludir, para recoger todo lo que por no haberse mandado a Simancas estaba desperdigado y en trance de perderse. Con todo pronto la realidad les hizo ver que se habían quedado cortos y a los ocho años, en 1866, crearon otro nuevo archivo, el Histórico Nacional, para reunir en él la documentación proveniente de instituciones ya prescritas y por tanto consideradas como de carácter plenamente histórico, encontrándose en primera fila los fondos de clero regular y secular incautados por el Estado. No se les ocurrió llevarlo a Simancas. Aparte de los beneficios que aquella medida reportaría a los señores académicos de la Historia y a los estudiosos de la universidad madrileña, los límites físicos del Archivo de Simancas son

sillares de piedra y no pueden forzarse. Hubiera sido igual de encontrarse bastantes kilómetros más cerca.

Comprendiendo la lección, si en la época actual, en cualquier país, se llegase, o volviese a llegar, a este punto de rebosamiento habría dos opciones: crear, como entonces se hizo, un nuevo depósito definitivo dispuesto para recoger durante una larga etapa la producción documental no absorbida, así como la venidera, o hacer definitivo el archivo intermedio, creando otro nuevo que realizase su antigua función. Para optar por una u otra tendríamos en consideración sus circunstancias: si el archivo intermedio o de tránsito no tuviese condiciones físicas para guardar los documentos con carácter indefinido la solución correcta sería la primera. Si por el contrario reuniera las condiciones necesarias y, debido a la imposibilidad de transferir lo más antiguo, no hubiese llegado a acumular gran cantidad de fondos, sería lo más razonable darle estabilidad como archivo definitivo, en vez de proceder a movilizar miles y miles de documentos, evitando el riesgo de desorden y deterioro que para la documentación supone todo traslado masivo, y el enorme costo en trabajo y dinero que acarrearía tal traslado, sin ventajas que lo compensen. Tratemos de despersonalizar los problemas creando las personas para los archivos y no los archivos para las personas.

Esto nos proporciona también otra lección: si verdaderamente podemos conseguir la organización de una red de archivos en la que tanto los inmediatos, como los intermedios y los definitivos estén en condiciones de garantizar esa fluidez necesaria para el buen funcionamiento del sistema, pongamos todo nuestro entusiasmo en su creación, pero si sólo alcanzamos a llevar a decreto una teoría que resulta imposible de realizar en la práctica por carecer de base física en que sustentarse más vale que procuremos adaptarnos a la realidad y hagamos las cosas conforme la realidad requiera (2).

Por otra parte, una de las penosas consecuencias a que nos lleva el criterio de concentración a ultranza es el empobrecimiento cultural de las provincias o regiones. Algunas han tenido que llevar a sus Universidades copias xerográficas o micrográficas de lo que, originado en su ámbito, se ha acumulado en la capital de la nación. Es posible que cuando se hizo fuera lo más saludable para la conservación de los documentos, pero hoy tenemos que tratar de evitarlo dotando a esas regiones de medios humanos y económicos para mantener su documentación en condiciones aceptables de conservación y servicio. Tengámoslo en cuenta a la hora de organizar, rechazando la creación de grupúsculos satélites manejados por personas no bien capacitadas, que obviamente no pueden recibir una dirección adecuada que les llega desde muchos kilómetros de distancia. No importa que su contenido sea concreto a su ámbito local o lo desborde: si allí los produjo el devenir de los hechos, allí deben de quedarse. No temamos descentralizar siempre que hayamos conseguido una buena organización que relacione unos archivos con otros, articulando sus informaciones y servicios. Una buena información intercambiada y la facilidad que hoy existe de obtener copias por cualquier procedimiento reprográfico evitará las más de las veces desplazamientos innecesarios.

(2) Tratemos de despersonalizar los problemas ateniéndonos a lo que una buena organización requiere.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, seguimos viviendo todavía la centralización napoleónica, de donde nos abruman tantos problemas, hoy que ya no hay imperios.

Un nuevo escollo vamos a encontrar para nuestra planificación en la supervivencia de la clasificación de los archivos en *administrativos* e *históricos*, inverosímilmente conservada, pero a todas luces falsa y obsoleta. Porque así se ha comprendido ya en la guía de los archivos a nivel mundial publicada en 1975 por la revista «Archivum», con la impropia denominación de Anuario (3) han desaparecido ya estas denominaciones sustituidas, por las de «archivo abierto» y «archivo cerrado», respectivamente, que responden a una realidad (4). La documentación, desde el momento en que se produce hasta que llega a su asiento final, es una y aquellos conceptos surgidos en el siglo XIX, cuando se forman los grandes archivos nacionales (5), están entorpeciendo gravemente su estimación y por consiguiente poniendo en peligro su conservación. No es posible seguir aceptando esa clasificación artificial y sin base real en un tiempo como el actual en que los historiadores más que estudiar el ayer pretenden estudiar el hoy y, aun si me apuran, el mañana. Si lo que se conserva en los llamados archivos administrativos no fuera Historia los historiadores no irían, como van, a consultarlos. Los documentos tienen valor por sí mismos, no a fuerza de años, aunque la vejez les proporcione un valor añadido, pero nunca será esta la base de su pretendida historicidad (6), ni tampoco la de su uso libre o restringido. Los plazos que se ha intentado poner en las diversas legislaciones son inoperantes a la hora de la verdad porque las salvedades son tantas que los plazos no nos valen gran cosa.

Mejor sería que nos decidiéramos, de una vez por todas, a romper con estos conceptos convencionales y ajustarnos a la realidad de que la documentación no admite más diferencias que la permisibilidad de su uso, es decir documentación que *todavía* no puede consultarse sin permiso de la entidad productora o la que *ya* puede consultarse libremente. Historia es todo y administración es todo. Puede preguntarse cómo denominaríamos entonces a los archivos clasificados hoy como «Administrativos». Muy sencillo, y mucho más ajustado a la realidad: «Archivos inmediatos» o «Archivos en primera fase». Rechacemos conceptos decimonónicos, que esta-

(3) Anuario, en castellano, es la publicación que tiene una periodicidad de publicación anual, cuya condición no concurre en el que citamos. El primero se publicó en 1955 y el segundo en 1975, con datos de 1973-74. En realidad es una Guía de Archivos a nivel mundial.

(4) Es el reconocimiento implícito de que ningún archivo puede ser indefinidamente abierto.

(5) En Francia se crearon los Archivos Centrales en 1794. Le siguieron Inglaterra, Alemania, Suiza y Portugal. Los jóvenes países hispanoamericanos lo hicieron durante el siglo XIX y primeros años del XX, desde 1821 (Argentina) hasta 1914 (Venezuela). La creación en España de los archivos, a que hemos hecho alusión ya en el texto de este trabajo, fue seguida casi de inmediato de la creación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, en 1866, pensado solamente para la documentación antigua, de más de cincuenta años. La primera entidad administrativa en comprender el tremendo error fue el Ministerio de Hacienda, que pidió para su archivo un funcionario del nuevo Cuerpo, a cuyo ejemplo siguieron otros ministerios, siendo a su vez aquél el primero, y hasta hoy el único, que lo solicitó también para sus Delegaciones provinciales.

(6) La Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de 21 de junio de 1972 (art. 1.º, apartado d) considera como integrantes de éste «Los fondos existentes en las Bibliotecas y Archivos de la Administración Pública Central, Local e Institucional, cualquiera que sea la época a que pertenecen».

mos ya terminando el siglo XX. Creo que la aceptación de esta verdad ayudaría mucho a que se reconociese la importancia de nuestra misión y la necesidad de la presencia del archivero técnicamente capacitado en sitio inmediato a las fuentes de producción documental, asegurando así una protección de la que hoy, la mayor parte de las veces, carece. Borrando las falsas denominaciones borraríamos también de la mente de las personas ajenas a la profesión esos conceptos erróneos que les llevan a asegurar: «Aquí no hay nada histórico, todo es administrativo», con toda la carga negativa que para la documentación esto supone. Nosotros estamos convencidos, pero hay que convencer a los demás.

Creo que esto clarificaría bastante las cosas y posiblemente produciría también efectos saludables en cuanto a la consideración y consecuente conservación de los documentos, no sólo estatales o institucionales, sino incluso privados.

¿Que para todo esto hace falta mucho dinero? No lo dudamos, pero la mayor parte de las veces —pensamos— el defecto está en que lo poco que hay no se reparte adecuadamente. Nadie parece haber caído en la cuenta de que la mitad de los despilfarros administrativos provienen precisamente de la anarquía de sus papeles. Que consigamos nuestro propósito o no es algo que cae fuera de nuestro alcance, pero que nunca puedan decirnos que no sabíamos lo que queríamos, ni a dónde queríamos llegar.

Difusión

El tercer punto que tenemos que considerar es el de la distribución y difusión de conocimientos a base de la documentación reunida. Sin ello todo lo anterior carecería de sentido (7). En cuanto un mensaje se apoya sobre un soporte material se convierte en documento destinado a ser comunicado, sea cual fuera la base física de este soporte (8).

Es un problema que preocupa a nivel mundial y que tenemos que abordar en sus tres vertientes: comunicación con la administración o entidad productora en función de un asesoramiento para el correcto desarrollo de su actividad, comunicación al usuario sobre el que pueden recaer los actos administrativos —derecho que ampara hoy la legislación—, y comunicación e información al estudioso que trata de averiguar algo sobre un pasado, más o menos lejano o cercano, con fines científicos y culturales.

El suministro de información a la administración o entidad productora no siempre es forzosamente de datos rutinarios recientes. Son muchos los casos en que se remueven los documentos de los archivos buscando razones en que apoyar derechos históricos. Tales los conflictos de límites territoriales, surgimiento de nuevas nacionalidades, ocupación indebida de un

(7) LASSWELL, HAROLD D., en su obra citada en la nota 1, define la difusión como «la transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente» o «transmisión del legado social».

(8) CAUDE, ROLAND: «Organiser pour vivre», París, 1966, aboga por que toda la información sea transformada en documento escrito. Con este criterio se está actuando al mecanografiar para su consulta por el público los textos grabados de los archivos orales. Existen ya algunos catálogos publicados en Méjico y recientemente, en 1980, la «Oral History Association» ha publicado en USA, con el título de «Evaluation Guidelines», un pequeño pero sustancioso folleto en que se dan normas para la toma correcta de datos de este tipo de fuentes de información.

territorio, reivindicación de una herencia por largos años usurpada, recurso contra una añeja sentencia que no se consideró justa y se desea derogar. Otras veces la defensa contra el expolio del patrimonio artístico, bibliográfico y documental (9).

El derecho a la información de los administrados, en cuanto a receptores de las resoluciones de cualquier administración pública o privada, es un concepto muy antiguo (10), pero raras veces respetado y casi siempre entorpecido. Los Estados y sus gobiernos, así como las entidades, han celado siempre cuidadosamente sus procedimientos al adquirir conciencia de que la posesión de información es sinónima de poder político, social, económico, científico y cultural. En la primera sesión de la Asamblea General francesa del período 1978-79, el entonces primer ministro Raymond Barre presentó un Proyecto de Ley relativa a la obligación de hacer conocer los motivos de los actos administrativos. En su artículo 1.º se proclama que todo ciudadano tiene derecho a conocer el motivo de las resoluciones de la Administración. En nuestra actual Constitución también se ampara este derecho en su artículo 105, y hace un año, entre los meses de mayo y junio de 1980, el Instituto Nacional de Prospectiva de la Presidencia del Gobierno organizó un coloquio sobre problemas de la comunicación en que se abundó en la misma idea (11). Pero no nos hagamos muchas ilusiones: una cosa es lo que se predica y otra lo que se pone en práctica. En la realidad son tantas las trabas, en parte legítimas, que interceptan su realización que casi puede decirse que estamos en período de iniciación, valga la paradoja, de una secular teoría que tardará todavía muchos años en adquirir madurez y vigencia, si es que alguna vez lo consigue. En verdad, yo creo que más que cuestión de años es de situaciones históricas, que unas veces lo permiten y otras lo bloquean.

El tercer cauce de información es el que sirve a la investigación científica y cultural. La transmisión cultural incrementa la cohesión social y favorece la integración. En los países en los que la cultura es un bien de

(9) En nuestro caso tiene nombres concretos: Gibraltar y Sahara. A escala menor recordemos que el retrato ecuestre del duque de Lerma pintado por Rubens está hoy en el Museo del Prado gracias a que la documentación que acredita que ha pertenecido al Patrimonio Real estaba a mano cuando quisieron sacarlo a subasta pública. La alarma fue dada por un artículo publicado en el diario «ABC» el 28 de septiembre de 1962 por la autora del presente trabajo, que estaba estudiando esa documentación en el Archivo Histórico Nacional. El caso más reciente es el de los derechos que ha podido exhibir el Estado español para justificar su reclamación sobre la propiedad del «Guernica» de Picasso.

(10) En nuestra documentación podemos citar un documento de Jaime I, que se conserva en el Registro 13, en el que hace referencia al «nuestro público Archivo» y de Alfonso V se cita un privilegio de 1419, en que al fundar el archivo del Reino de Valencia, dice que lo hace para que las autoridades y particularidades del reino puedan tener noticia de todas las cosas pasadas.

De hace pocos años podemos citar en nuestra legislación una orden de 11 de marzo de 1966 sobre acceso a los documentos de la administración pública, pero no ha tenido vigencia en la práctica. La Ley de Procedimiento administrativo vigente, en su artículo 23, autoriza sólo al interesado, haciendo salvedad de la seguridad del Estado y el derecho a la intimidad.

(11) Se presentaron nueve ponencias, de las que citaremos para este punto concreto la de Beatriz Rodríguez Salmones «El acceso de los ciudadanos a los Centros de Documentación de la Administración Pública. De nuestro compañero Pedro López Gómez citaremos el artículo «Los archivos públicos y el ciudadano» (ANABAD, año XXIX, núm. 4, octubre-diciembre 1979, págs. 35-37, en que afirma que el archivo es un «bien cultural» que tiene que ponerse al servicio de los ciudadanos, que son fuentes primarias de información.

consumo profusamente extendido, las diferencias sociales entre sus ciudadanos se acortan sensiblemente. Y aquí también tenemos que apuntar nuevos rumbos. Es fundamental que en este campo el archivero no permanezca en actitud pasiva, esperando que alguien solicite sus informes: debe ser él quien inicie el suministro de conocimientos posibles sobre la documentación que custodia. Es un hecho conocido por todos los colegas que la publicación de cualquier instrumento de descripción de fondos de archivo produce de inmediato un movimiento masivo de investigadores hacia los fondos descritos. Pero hay algo más: la labor de publicación o edición de documentos, previamente acondicionados y comentados que se venía considerando como labor a realizar fuera de las horas de trabajo del archivero, ha pasado a ser considerada como legítima, siempre y cuando esto no suponga el abandono de otras tareas básicas de interés primordial. Esto está en parte resuelto hoy con las ediciones en microfilm realizadas por los propios archivos sobre series que puedan interesar a un amplio sector de público.

La conclusión que de todo lo expuesto puede sacarse la resumiremos en muy pocas palabras: en tanto en cuanto salgamos de nuestra voluntaria reclusión, nos demos a conocer y hagamos notar nuestro servicio y nuestra imprescindible presencia en una sociedad bien organizada, en la misma medida nuestro trabajo y nosotros mismos seremos estimados y respetados por los demás.